

Extrait du El Correo

<http://elcorreo.eu.org/Liberacion-unilateral-de-seis-prisioneros-de-FarcRespuesta-a-la-ultima-carta-de-Intelectuales-de-Colombianos-por-la-Paz-dentro-del-proceso>

Liberación unilateral de seis prisioneros de FarcRespuesta a la última carta de Intelectuales de "Colombianos por la Paz" dentro del proceso de Intercambio epistolar.

Date de mise en ligne : lundi 22 décembre 2008

- Les Cousins - Colombie -

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

Señores

COLOMBIANOS POR LA PAZ

"Aun cuando sean alarmantes las consecuencias de la resistencia al poder, no es menos cierto que existe en la naturaleza del hombre social un derecho inalienable que legitima la insurrección."

SIMÓN BOLÍVAR

Compatriotas :

Con esta reflexión del padre de nuestras repúblicas, el Libertador Simón Bolívar, -que ayuda a comprender preocupaciones colectivas- damos continuidad al intercambio epistolar respondiendo a los temas planteados en su misiva del 27 de noviembre.

Compartimos con ustedes que la discusión sobre la guerra y la paz en Colombia no puede ignorar fenómenos que estremecen hoy la conciencia nacional. Los denominados eufemísticamente "falsos positivos" -que debieran llamarse asesinatos de civiles no combatientes ejecutados por el Estado- son, como ustedes acertadamente lo perciben, manifestación dolorosa de la guerra sucia que vive Colombia. Constituyen un espeluznante grito de victoria de la "seguridad democrática" del presidente Uribe que siempre midió el éxito de esa política -en su componente militar- en litros de sangre.

No puede considerarse como hecho aislado lo que obedece a una directiva puntual del Ministerio de Defensa y de la Presidencia, repetida sistemáticamente a nivel nacional en todas las guarniciones.

Es imposible desvirtuar que los miles de civiles asesinados para ser presentados noticiosamente como guerrilleros muertos en combate, lo fueron por el estímulo de los ascensos y recompensas ofrecidas desde el gobierno a los militares. Así como es un hecho destacable, el que después del conocimiento público sobre semejante genocidio, el Ministerio de Defensa no volvió a publicar sus abultadas cifras de "muertos en combate" con las que sustentaban su fantástica "derrota de la insurgencia" y el "fin del conflicto". La conciencia de la nación debe impedir que este tipo de crímenes de lesa humanidad que implican al Estado, terminen en la impunidad. La destitución de algunos altos mandos militares por tales hechos debe ser complementada con una responsabilidad penal, lo que muy seguramente, llevará que las cortes y los tribunales de los pueblos sienten a la "seguridad democrática" - desarrollo de la fascista doctrina de la seguridad nacional - en el banquillo de los acusados.

Tal como lo aprecian ustedes, la escalada del conflicto -que tiene relación directa con la injerencia creciente del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia- ha estado acompañada de una mayor degradación. Algo debemos hacer para desembarazarnos de esa maldición que pareciera perseguirnos desde la destrucción de la Colombia de Bolívar y de su gran obra legislativa concebida de cara al bien común.

Desde las medianías del siglo pasado la degradación acicateada por el Estado no cesa de crecer en espiral. Los mismos métodos brutales que segaron la vida de 300 mil colombianos en la década del 50, ahora más refinados, siguen victimizando a la población, descuartizando con motosierras, enterrando en fosas comunes, desplazando a millones de campesinos para apoderarse de sus tierras, "empapelando" jurídicamente a ciudadanos, hasta alcanzar el nivel de barbarie de los "partes positivos".

Recordamos la respuesta del comandante de las FARC Manuel Marulanda a una pregunta sobre humanización de

la guerra : "la mejor manera de humanizar la guerra es acabarla". Hoy seguimos teniendo la misma percepción, y para ello es indispensable el cambio de las injustas estructuras.

Celebramos que su alusión a los prisioneros de guerra, esté desprovista de ese "humanitarismo tuerto" diseminado por los medios, que ve a los prisioneros de un sólo lado, ignorando que se trata de dos partes contendientes. Este enfoque ayuda a la búsqueda de una solución realista del problema, para lo cual reiteramos nuestra determinación y voluntad de alcanzarla.

En este esfuerzo colectivo, es importante avanzar en la identificación y precisión de los temas objeto de nuestras reflexiones para ganar certezas en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo : en un conflicto armado y social como el que vive Colombia desde hace más de 40 años, integrantes de la fuerza pública debidamente armados, entrenados y uniformados combaten diariamente, de distinta manera y en diferentes escenarios, con la guerrilla revolucionaria, presentándose bajas de parte y parte, como ocurre en toda contienda bélica. Finalmente una de ellas obtiene la victoria y toma prisioneros de la parte contendiente. Eso ha ocurrido, ocurre e inevitablemente seguirá ocurriendo, aquí y en todo el mundo mientras persistan los conflictos. Ese tipo de capturados, son prisioneros de guerra. Esa es su categoría dentro de la confrontación. Salvo que se pretenda, como en el caso del gobierno de Álvaro Uribe, negar la existencia del conflicto.

La propuesta de Manuel Marulanda Vélez al congreso de aprobar una ley permanente que deje abierta la posibilidad del canje, cobra plena vigencia en estas circunstancias. Evitaría un cautiverio prolongado y doloroso. En este mismo sentido y con implicaciones de muy diversos órdenes, hemos planteado en diversas oportunidades la conveniencia de un reconocimiento de las FARC-EP como fuerza beligerante. Se presenta también la retención de personas con algún tipo de representación política, que han tomado partido involucrándose abiertamente a favor de la guerra y en crímenes contra sectores populares, vinculados con el militarismo y el paramilitarismo como lo demuestra todo el proceso de la para política, o, que con sus acciones, golpean al pueblo, al tesoro o los bienes públicos. Estos, ante la ominosa impunidad del régimen y en la lógica de los de abajo, deben responder por su conducta. Y se da también el fenómeno de la retención de personas con objetivos económicos que tiene múltiples autores : policías, militares, DAS, paramilitares, delincuencia común y miembros de la insurgencia. En la responsabilidad que nos cabe y, entendiendo las dificultades que ello nos acarrea, nos hemos hecho esta reflexión : ¿cómo se financia una confrontación como la colombiana ? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, el Estado ? decreta cargas impositivas generales, Impuestos de guerra, aportes de las empresas trasnacionales, entre las que se destacan : BP, Chevron- Texaco OXI, Drummond, Chiquita Brand, Repsol, Monsanto, CocaCola, etc. ; pero fundamentalmente financia la guerra con ayuda económica, militar y tecnológica del gobierno de los Estados Unidos. Colombia es el primer receptor de esta "ayuda" en el hemisferio, la cual se paga con soberanía. El prominente sociólogo estadounidense James Petras estima que Washington ha invertido en el plan Colombia más de 10 mil millones de dólares en los últimos 6 años. Es una desproporción de recursos económicos y de medios para una guerra Injusta contra un pueblo.

En el espíritu de minimizar el impacto sobre los no combatientes, las FARC expidió la Ley 002 sobre tributación, que cobra un impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares y que solo en última instancia contempla el recurso de la retención.

La guerra a medida que se generaliza produce efectos dolorosos y no deseados. Con franqueza les comentamos que no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos. De hecho, lo hemos manifestado estando inmersos en diálogos que buscaron la paz con anteriores gobiernos, como bien lo resaltan en su nota.

Los temas de esta misiva son más que oportunos para sugerirles lo importante que sería abrir un amplio debate sobre la situación de miles de presos políticos encarcelados luego de redadas masivas utilizadas como táctica para atemorizar y disuadir el apoyo popular a las fuerzas insurgentes. Son millares los ciudadanos acusados de rebelión

y terrorismo a través de montajes de la inteligencia militar y del pago de jugosas recompensas. Esta reflexión colectiva debería incluir también la desaparición forzada de personas, la más aberrante forma de secuestro existente ejecutada por el Estado, y que a la pérdida de la libertad agrega la pérdida de la vida luego de espantosas torturas y en medio de la mayor impunidad.

Finalmente, nos piden ustedes, de cara a un eventual intercambio humanitario, avanzar en algunas reflexiones acerca de cómo "diseñar escenarios en donde sea posible debatir con la sociedad alternativas políticas para encontrar una senda transicional hacia una sociedad justa y equitativa".

Al respecto estamos proponiendo a través del manifiesto de las FARC-EP y de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia (documentos adjuntos), un encuentro de las fuerzas políticas y sociales interesadas en el cambio, que nos permita delinear de manera consensuada un gran acuerdo nacional hacia la paz, para construir colectivamente alternativas políticas a la guerra y a la injusticia social. Estamos seguros que a nosotros y a millones de Colombianos nos gustaría ver florecer un nuevo gobierno, producto de ese pacto social, que convoque al diálogo de paz con participación de las organizaciones políticas y sociales del país, que lleve sus conclusiones a una asamblea nacional constituyente, para que el tratado de paz así logrado, tenga además, sustento constitucional.

Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros en dos etapas. Estos serán entregados a ustedes, como "colombianos por la paz de Colombia" en cabeza de la senadora Piedad Córdoba. Primero serán liberados tres agentes de policía y un soldado, y a continuación, el señor Alan Jara y el diputado Sigifredo López. Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento.

Reciban nuestro saludo cordial.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, diciembre 17 de 2008

Manifiesto de las FARC

Compatriotas :

1. La dignidad nos está convocando a la resistencia en unidad frente al gobierno forajido, ilegítimo e ilegal que se ha tomado el Palacio de Nariño, a la convergencia y al Acuerdo Nacional para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad que abate al país, y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera.

Colombia merece respeto. No podemos tolerar más esa mafia narco-paramilitar de latifundistas y ganaderos, narcotraficantes y empresarios que, con el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos y el bombo de los medios de información, convirtieron a Colombia en un infierno de la guerra, las masacres, las detenciones masivas de ciudadanos, las desapariciones, la miseria y el saqueo, y de todos los desafueros del terrorismo de Estado.

2. El gobierno de Uribe marcha al compás de las directrices de Washington y de las exigencias de poderosos capos narco-paramilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40, Castaño, Cuco Vanoy, Isaza, Báez, Macaco, Don Berna, El Alemán, Giraldo, El Tuso, Gordo Lindo y otros siniestros personajes de motosierra y cocaína, socios del Presidente. Esa mafia financió con maletas repletas de dólares las dos campañas presidenciales de Uribe.

Sí, ellos lo eligieron, y son ellos los que están mandando.

Impusieron a punta de fusil, de terror y de fraudes electorales a decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes que han actuado como peles del paramilitarismo en la política y en el gobierno. Como se creían los dueños del país no tuvieron reparo en proclamar con clarines de victoria que habían logrado elegir el 35% del actual congreso, lo que equivale a unos 80 representantes y senadores. Esos mismos votos contaminados llevaron a Uribe a la Presidencia de la República, y por eso y mucho más, su mandato es ilegítimo e ilegal.

Este gobierno está erigido sobre miles de fosas comunes y masacres, sobre tierras despojadas y millones de desplazados, sobre lágrimas y luto... Nada se hizo sin el visto bueno o sin la participación de las fuerzas armadas oficiales.

Toda la cúpula del Estado, empezando por el propio Uribe, cabecilla principal de los "paracos", está invadida por el monstruo de la narco-para-política que se tomó a Colombia. El Vicepresidente fue el inspirador del bloque paramilitar que actuó sobre la capital. La comandancia del ejército y la policía no puede negar que siempre actuó en concierto para delinquir con ellos. El ministro de Defensa conspiró con Carlos Castaño. La ex canciller Araújo era cuota de Jorge 40. El ex jefe del DAS Jorge Noguera, además de montar con ellos el conocido fraude electoral a favor de Uribe, les suministraba la lista de los dirigentes sindicales y populares que debían asesinar.

Al país se lo estaban robando los mandamases paramilitares y Uribe no decía nada. Se robaron los recursos de la salud. Mordieron cuanto contrato aparecía. Saquearon los presupuestos departamentales y municipales. Se les permitió cobrar impuestos...

El Acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre el gobierno y sus paramilitares, fue el pacto de la impunidad, en el que el gobierno se comprometió a garantizarles penas irrisorias y simbólicas, participación en política, la no extradición, el respeto a sus riquezas mal habidas amasadas con el despojo, el narcotráfico y el lavado de activos.

Esa es la razón que ha compelido al Presidente Uribe al desacato y al desafío insólitos frente a la providencia de la Corte Suprema de justicia que dictaminó que paramilitarismo y concierto para delinquir no es sedición. Él entiende que sin el rótulo artificial de delito político que pretendía colgarle al paramilitarismo para santificarlo, se le cierra la más importante opción de impunidad con que contaba, no sólo para favorecer a los paramilitares, sino para exculpar al Estado, genitor de esa inhumana estrategia contrainsurgente en la que también están involucradas la CIA y la DEA.

Es que Uribe se ha merecido el repudio de los pueblos que en sus giras internacionales lo recibe con gritos de asesino, asesino ; que renuncie por paramilitar, por ilegítimo y por ilegal.

Cualquier gobierno del mundo en tales circunstancias ya habría caído sin remedio. Y los colombianos no somos menos para tolerar semejantes gobernantes, así cuenten con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

3. Colombia está siendo violentada además por la política de Seguridad Democrática diseñada por Washington como desarrollo de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional y como estrategia de predominio del imperio sobre los pueblos de Nuestra América. En esencia esta política -explicada por el general Craddock del Comando Sur- busca en el marco de la recolonización neoliberal, asegurar la inversión y el expolio de las trasnacionales mediante la aplicación de leyes severas y la fuerza, para reprimir y aniquilar la resistencia de los pueblos y la inconformidad social.

No podemos permanecer impasibles frente a esta política que ya empieza a ser ejecutada también por otros gobiernos del hemisferio.

Para el caso de Colombia la Seguridad Democrática tiene como componente militar el Plan Patriota, cuyo objetivo principal es la derrota militar de la guerrilla de las FARC, o en su defecto la reducción de su voluntad de lucha para llevarla doblegada a la mesa de negociaciones. Desde luego no se sienten tranquilos con esta alternativa de poder construida por el pueblo como resistencia a décadas de violencia estatal y de opresión.

Con ese objetivo de derrotar a la guerrilla movilizaron decenas de batallones y brigadas móviles hacia el sur y lanzaron grandes y sostenidas operaciones en otras áreas del país. Instalaron puestos de mando con oficiales gringos en Larandía y Tres Esquinas, Caquetá, en los umbrales de la Amazonia que codician. Activaron satélites espías y aparatos con tecnología militar de punta. Desplegaron cercos estratégicos, bloquearon zonas campesinas, desplazaron a la población, asesinaron y desaparecieron civiles, incendiaron parcelas, robaron ganados, bombardearon día y noche, trillaron selva y cordilleras, y no han podido en cinco años mostrar un resultado contundente. Sólo el desgaste inútil y el resquebrajamiento de la voluntad de lucha de las tropas oficiales que mueren en la selva o salen lisiados de ella, porque así lo quiere un loco guerrillista que vocifera en Bogotá y echa generales por ausencia de resultados o partes de victoria.

De la pólvora y el fragor de los combates está surgiendo una fuerza guerrillera de nuevo tipo, fogueada en las maniobras enemigas y en el choque con las nuevas tecnologías de la operatividad contrainsurgente, guerrilla que es verdadero poder de fuego político y militar al servicio de la causa popular.

Pero paralelamente al desarrollo del Plan Patriota en los distintos teatros de operaciones, el gobierno iba entronizando el delito de opinión, la represión de la conciencia, hasta llegar a encarcelar a más de 150 mil ciudadanos acusándolos de simpatizar con la guerrilla. En aras de disuadir el respaldo al proyecto político y social de la insurgencia se está cercenando en Colombia el derecho universal a la opción política. No le bastó eliminar físicamente a toda una generación de revolucionarios que se incorporaron a la Unión Patriótica como alternativa legal de cambio ; ahora quieren imponer un pensamiento, el de la nueva inquisición, de la derecha y el fascismo. Un pensamiento que criminaliza la protesta social con el cuento que detrás de toda movilización popular contra las políticas del gobierno está la guerrilla. Un autoritarismo que quisiera barrer con la autonomía y la independencia de las otras ramas del poder público para establecer sin sobresaltos constitucionales el reino de la tiranía, que sólo tolera las oposiciones que no se propongan el cambio del statu quo, de las estructuras de la opresión.

4. Esa derecha fascista activó el presupuesto de la nación en función de la guerra y el resultado es el desastre social. Niños que mueren de hambre, crecimiento de la pobreza y del marginamiento, abandono total de los proyectos de construcción de vivienda popular ; la mayoría de la población sin servicios de agua, luz y alcantarillado. Indiferencia del gobierno frente a la carencia de escuelas, colegios y maestros porque optó por la privatización de este servicio, lo mismo que el de la salud. Recorte de las transferencias que paraliza el desarrollo de las regiones. Venta de empresas rentables del Estado para allegar más recursos a la guerra. Privatización paulatina de empresas estratégicas como ECOPETROL. Incremento de los índices de desempleo y subempleo al impulso de la flexibilización laboral que pisotea los derechos de los trabajadores y dispara las ganancias de los empresarios. Hambre y alto costo de la vida es lo que generan las políticas del Estado contra la masa popular. Perspectivas de agudización de la crisis social con la aprobación del TLC que atenta contra la patria, la soberanía y la calidad de vida de los colombianos.

La perfidia con que actúa el Estado debe ser respondida con la movilización de pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país en demanda de los derechos conculcados para constatar en la lucha de masas la fuerza de los de abajo y para buscar la convergencia de todos los sectores democráticos bajo una sola bandera política y social con miras a conformar un nuevo gobierno que trabaje por la paz, la justicia social y el rescate de la dignidad y la soberanía del pueblo de Colombia.

5. Para la construcción de esta alternativa ponemos a consideración del país, de sus organizaciones políticas y sociales, de todo el pueblo, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia para abrir la discusión y el intercambio en torno a las banderas y programa de un nuevo gobierno que sugerimos patriótico, democrático, bolivariano, hacia un nuevo orden social, comprometido en la solución política del grave conflicto que vive el país.

Un nuevo gobierno que materialice el proyecto político y social del Libertador, que conforme un nuevo Ejército Bolivariano para la defensa de la patria y las garantías sociales. Un nuevo orden edificado sobre la democracia y la soberanía del pueblo, que agregue a las ramas del poder público los poderes moral y electoral, que instituya el congreso unicameral y la revocatoria del mandato. Un nuevo sistema de gobierno que castigue con severidad la corrupción y la impunidad, que ponga fin a la política neoliberal, que estimule la producción en sus diversas modalidades, que asuma el control de los sectores estratégicos, que haga respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales y que implemente políticas eficaces de preservación del medio ambiente. Un gobierno que trabaje por la gratuidad de la educación en todos los niveles, que instrumente la redención social, la justicia agraria, que renegocie los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para la nación, que deje sin vigencia los pactos militares, tratados y convenios que mancillen la soberanía de la patria, que no extradite nacionales, que objete el pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Un gobierno cuya divisa en política internacional sea la Patria Grande y el socialismo y que priorice las tareas de la integración de los pueblos de Nuestra América. Por eso la política de fronteras de FARC opta por la hermanación y no por la confrontación con los ejércitos de los países vecinos. Nuestra lucha es de resistencia y liberación frente al régimen opresor colombiano.

Es hora de analizar y seleccionar la ruta que nos conduzca a la paz, a la independencia, la justicia social, la democracia, y la unidad como camino para sobrevivir y enfrentar con éxito las políticas de los imperios.

6. La paz es un proceso, un bien común que requiere de todos la preparación del terreno para que germine. No se logra de la noche a la mañana. Necesita nuevas estructuras económicas, políticas y sociales que la sustenten, cambios como los que sugiere la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.

No habrá paz de los sepulcros. Todos los planes militares de las oligarquías y el imperio para exterminar a la insurgencia, desde el LASO (Latin American Security Operation) ejecutado en Marquetalia, hasta el Patriota, han fracasado porque el alzamiento armado por causas sociales, económicas y políticas, no se derrota ni con bombas, ni con plomo, ni tecnologías recién creadas.

Por chifladura o demagogia electorera, Uribe ha anunciado estar dispuesto a oficializar una zona de encuentro para firmar la paz en tres meses. 43 años de confrontación no se superan en tan corto tiempo. La problemática política, económica, social, cultural, ambiental y de soberanía del país no se puede resolver en 3 meses, a no ser que alguna de las partes haya derrotado al contendor, y este no es el caso. Uribe no es el hombre para la paz en Colombia. No está programado por los gringos para eso. Un tipo que ni siquiera reconoce la existencia del conflicto armado no logrará la paz por ninguna vía. Sólo un nuevo gobierno patriótico y democrático, soberano, podrá lograr la paz negociada, no un gobierno títere de la Casa Blanca. Se necesitaría un gobierno compenetrado con la necesidad de la paz, que apoyado en el pueblo y el interés nacional tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles, de reducir drásticamente el presupuesto de la guerra a favor de la inversión social y de exigir la salida del país de las tropas y asesores estadounidenses entrometidos en el conflicto interno y factor atizador de la guerra, para darle paso resuelto a los diálogos de paz.

7. La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington, empeñado en la mayor suma de felicidad posible para el pueblo según el mandato del Libertador.

Es necesario empezar cuanto antes el intercambio y el reencuentro de todos los actores de la transformación social y la paz, incluida la guerrilla, en torno a esta perspectiva. Aquellos que desde la servidumbre del establecimiento pregonan la exclusión de la insurgencia con rebuscados argumentos, lo hacen para inducir a la formación de una alternativa enclenque que sea presa fácil de los poderosos explotadores de siempre.

Proponemos despegar lo más pronto posible con los primeros contactos clandestinos, sin darle importancia al gobierno, para convenir un derrotero y para ir esbozando colectivamente algunos trazos programáticos para la

redención de Colombia.

Invitamos a este diálogo a los dirigentes revolucionarios, a los sectores democráticos de los partidos, a la gente avanzada del clero, a los militares patriotas y bolivarianos, a los líderes obreros y campesinos, estudiantiles, comunales, indígenas, a las negritudes, a los educadores, a las mujeres... a todos los liderazgos populares, para juntar anhelos y emprender juntos el camino hacia la Nueva Colombia.

8. El objetivo es la creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la paz, la justicia, la soberanía y el decoro de la nación, que se proponga un nuevo gobierno para salvar a Colombia del abismo, para recuperar la dignidad mancillada por el gobierno forajido de fascistas narco-paramilitares bendecidos por Washington, una nueva conducción de los destinos de la patria que proscriba la represiva y expoliadora Seguridad Democrática del imperio y la política neoliberal, que rescate la soberanía del pueblo, reestructure el Estado con el fin de garantizar el bien común y conforme un Ejército Bolivariano guiado por el amor al pueblo, la justicia social y la defensa de la patria. En fin, un gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente para darnos una nueva Constitución que refrende los cambios a favor del pueblo, hacia la paz y la convivencia, la verdadera democracia, la soberanía y la integración solidaria de los pueblos, como mandatos emanados de ese gran Pacto Social.

No nos queda otra alternativa que buscar unidos el camino para salir de la oscura noche orientados por la vislumbre de la justicia y la alborada nueva de la Gran Colombia.

Hacia la Nueva Colombia, Acuerdo Nacional por la Paz
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, septiembre de 2007

Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia

Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa a lo siguiente :

1. Solución política al grave conflicto social que vive el país.

2. La doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al pueblo y el odio a la tiranía. Serán garantes de la soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos.

La Policía Nacional dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que cumpla su función preventiva ; moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos.

3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. El pueblo se erige en soberano y como tal elige directamente al Presidente, a los miembros del legislativo unicameral, a los titulares del poder moral (Procuraduría, Defensoría y Contraloría) y al titular del poder electoral. Se instituirán los poderes moral y electoral. Todas las instancias de elección popular podrán ser objeto de revocatoria del mandato. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y Magistrados del país, previa democratización del sistema judicial. Se suprimirá el sistema penal acusatorio.

4. Se pondrá fin a la corrupción y a la impunidad. Los incursos en estas conductas recibirán castigo ejemplar. El

nuevo gobierno resarcirá la dignidad de los millones de desplazados, desaparecidos, asesinados, y de todas las víctimas del terrorismo de Estado.

5. Habrá libertad de prensa y democratización de los medios masivos de comunicación. En todo caso primará el interés social.

6. Rechazo a la política neoliberal. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos : el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.

Se procurará la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la PRODUCCION, a la pequeña, mediana y gran industria, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.

La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas.

7. Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etc., en beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente. Renegociación de los contratos con Compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificará la política energética.

Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos de los contratos existentes.

8. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendiente, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno.

El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la investigación científica.

9. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios.

10. Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.

Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional.

11. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración de Nuestra América. Todos los latinocaribeños serán considerados ciudadanos de Nuestra América. Patria Grande y socialismo será

nuestra divisa. Respeto a los compromisos políticos con otros Estados sin menoscabo de la soberanía. Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación. Se pondrá fin a la extradición de nacionales. Objeción al pago de la Deuda Externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.

12. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes. Materialización de la propuesta de sustitución de cultivos emanada de la audiencia pública internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente.

Novena Conferencia de las FARC-EP

Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo